



PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN EL FORO LA TOJA 2022

1 de octubre de 2022



INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN EL FORO LA TOJA 2022

Buenos días. En primer lugar, me van a permitir que me disculpe por no estar con todos ustedes de forma presencial. La COVID-19 me lo impide. Estoy bien, con un poco de gripe; pero sí me gustaría aprovechar esta introducción para animar a todos los ciudadanos, ahora que vamos a empezar la estrategia de vacunación frente a las distintas variantes de la COVID-19 a que, cuando las autoridades sanitarias así lo indiquen, continúen con este exitoso proceso de vacunación que hemos tenido en nuestro país.

Permítanme que comience esta intervención hablando de la grave situación que se está dando en Ucrania. Ayer Vladimir Putin proclamó la anexión a Rusia de una parte de Ucrania. Lo hizo después de organizar un referéndum de pantomima mientras bombardeaba Zaporijia asesinando a civiles inocentes con misiles rusos.

Quiero ser muy claro: ni España ni Europa vamos a reconocer nunca esa anexión ilegal y exigimos a Putin que abandone Ucrania cuanto antes poniendo punto y final a esta guerra injusta e ilegal. Putin sabe que está perdiendo esta guerra y sabe también que está muy solo, cuanto antes tome la decisión correcta de poner fin a la guerra, será mejor para todos. También para él.

Señores y señoras: hace justo un año tuve ya el placer de participar en la clausura de la III edición del Foro de la Toja. Ese día me precedió en el uso de la palabra, el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, un buen amigo personal y, lo que es más importante, un buen amigo de España. Tanto la intervención del primer ministro portugués como la mía propia abordaron una preocupación entonces creciente: la subida de los precios mayoristas de la energía y la necesidad de abrir el debate de tener una reserva estratégica de gas para Europa.

Hablamos ya aquí de la península ibérica como isla energética; hablamos ya de una respuesta conjunta de la Unión Europea a un problema que podía amenazar el crecimiento e incrementar las tensiones inflacionistas. Hablamos, de lo que había que hablar; hablamos, si se me permite la expresión, de un elefante que ocupaba la habitación, aunque en aquel momento pocos a nuestro alrededor parecían querer verlo.



Mostramos capacidad de anticipación y coherencia al plantear soluciones que hoy, como refería recientemente el presidente Macron, son el camino a seguir para hacer de la excepción ibérica la norma europea.

Intentamos ser coherentes a la hora de identificar el impacto en la economía real, en las familias y en las empresas. Intentamos ser consecuentes al plantear la excepción ibérica con el tope al gas. Y tratamos de llevar esa coherencia hasta el final al exigir la intervención de un mercado afectado por graves distorsiones.

Y lo hicimos, por cierto, mucho antes del inicio de la guerra de agresión de Putin contra Ucrania. Un conflicto cuyas consecuencias padece el mundo entero. La más relevante es, sin duda, la espiral inflacionista global que también afecta de lleno a nuestro país.

Señores y señoras: soy plenamente consciente del enorme impacto de la subida de precios en la economía real. Especialmente entre la clase media y trabajadora; la mayoría social de nuestro país.

Mitigar ese impacto constituye una prioridad absoluta, y a ese fin el Gobierno ha movilizado ayudas por valor de más de 35.000 millones de euros, equivalentes al 2,9% del PIB. Se trata de ofrecer una respuesta rotunda desde la AGE para proteger a la gente. Para proteger rentas, familias y empresas, como ya hicimos en el momento más duro de la pandemia.

Esta semana hemos conocido los datos adelantados de inflación del mes de septiembre. La moderación de los precios indica que las medidas adoptadas empiezan a surtir efecto y que avanzamos en la dirección adecuada, pero conviene no bajar la guardia en un escenario global tan complejo. Estamos preparados para actuar ante cualquier eventualidad.

Vivimos una época de incertidumbre marcada por la acumulación sucesiva de graves crisis. Es evidente que no elegimos la entidad ni la naturaleza del desafío al que nos enfrentamos, y este Gobierno ha tenido que enfrentarse a muchos en un periodo muy breve. En esta última legislatura, sin duda alguna, la crisis de la COVID-19 y también la crisis económica y social derivada de esta guerra son los ejemplos más elocuentes. Pero sí podemos elegir la respuesta que ofrecemos. Y en esa respuesta, es imprescindible no olvidar las lecciones de la experiencia reciente.



La senda elegida para superar la crisis financiera de 2008 ha quedado desacreditada por la historia y, sobre todo, por la evidencia empírica. Tardamos diez años en recuperar los niveles que otros estados habían alcanzado en sólo tres. Y lo hicimos además a costa de enormes sacrificios que pagamos más adelante. España afrontó la pandemia con 4.600 camas UCI. Un país como Alemania, con menos del doble de población, lo hizo con más de 28.000. Entramos de lleno en la mayor crisis sanitaria de los últimos cien años con 30.000 profesionales sanitarios perdidos en una década. Y con graves deficiencias acumuladas por una década de recortes.

No hay mayor herramienta para combatir la desigualdad y defender la justicia social que el estado del bienestar. Esta es la principal lección que tenemos que extraer de la crisis de la COVID-19. Pero la justicia social requiere de una condición de partida: justicia fiscal. Que cada cual aporte en función de su capacidad. Es el valor inherente al modelo social europeo. Y es un principio que impregna nuestro pacto constitucional.

Es un valor que vincula a los países más avanzados y líderes en el índice de desarrollo humano con una fiscalidad justa para proveer servicios públicos de calidad. El que sostiene el contrato social que cohesiona a un país.

La pregunta que debemos hacernos, sobre todo después de la COVID-19, es: ¿Qué estado del bienestar queremos? Es tiempo de elegir y las opciones son claras: ¿fortalecer o debilitar el estado del bienestar? ¿robustecer los servicios públicos o fragilizarlos? ¿Protegernos colectivamente frente a los riesgos de futuras crisis o desarmarnos?

Nuestro país no tiene un problema de gasto público, como algunos pretenden hacer ver. Antes de la pandemia, España era el sexto país de la Unión Europea con menos ingresos fiscales y el undécimo con menos gasto público. De hecho, nuestros niveles de ingresos y de gasto público han estado en los últimos años 8 y 5 puntos por debajo de la media de la UE. Recaudan y gastan más, aunque me gustaría decir más “invertir” que “gastar”, países como Francia, Bélgica, Alemania, Finlandia, Austria, Países Bajos, Suecia y Dinamarca. Países a los que miramos con cierta envidia del estado de bienestar y de sus sistema de bienestar social. Es cierto que en el otro extremo existen naciones que recaudan y gastan menos: son esencialmente repúblicas que pertenecieron al antiguo bloque soviético...



Si uno mira la clasificación de los países con mayores niveles de desarrollo humano y, por tanto, de menor desigualdad, de mayor cohesión social, lo que aparece es una correlación directa clarísima con los niveles de ingresos fiscales de esos países. No es una casualidad.

Por tanto, la cuestión es a quién queremos parecernos en el futuro. Lo que no podemos pretender es tener un estado del bienestar como los países nórdicos con niveles de ingresos fiscales propios de países menos avanzados.

Esa es la primera cuestión: ¿queremos ser europeos con un estado de bienestar europeo? Si respondemos afirmativamente debemos ser consecuentes y dotar de ingresos a ese estado de bienestar. De inmediato surge una segunda cuestión: ¿quién debe sufragar ese estado de bienestar? Y la respuesta es, a mi juicio, evidente porque está inscrita en nuestra Constitución y -aún más importante- en la experiencia histórica de nuestro continente y de nuestro país: debemos costearlo todos los ciudadanos en proporción a sus ingresos.

No deja de ser curioso que vivamos tiempos extraños en los que resulta necesario defender lo obvio: los impuestos deben ser progresivos. Quienes más tienen, deben aportar más a la caja común.

Por si fuera poco, las últimas directrices emitidas por los principales organismos internacionales, nada sospechosos de ser pseudocomunistas, como pueden ser la OCDE, el FMI, y el BCE cuestionan la irresponsabilidad fiscal de la que algunos hacen gala y aconsejan seguir una senda clara: gravar las rentas más altas para proveer así de servicios y de protección social a las clases medias y trabajadoras. En esa línea, las declaraciones del economista jefe del BCE, Philip Lane, esta misma semana, son reveladoras. A nadie le gusta pagar impuestos. El debate no está en si pagamos más o menos impuestos, sino a qué tipo de sociedad aspiramos, y qué nivel y de servicios públicos queremos como país y cuál es la forma más eficaz y justa de acceder a ellos.

Es evidente que hay tareas en las que el sector privado es más eficiente y desde luego imprescindible para garantizar nuestro crecimiento económico y nuestro bienestar social. Como lo es también, en estos tiempos de grandes revoluciones, como es la transición ecológica y la transformación digital, la exigencia de colaborar entre los público y lo privado es la mejor fórmula para acometer algunos de estos proyectos transformadores.



Pero pese a las afirmaciones falaces en sentido contrario, los datos demuestran que los servicios públicos son más eficientes y más rentables, entre otras cuestiones porque están sujetos a las economías de escala. Por eso, cuando se postula una reducción unilateral de ingresos la pregunta real que debemos hacernos es qué prestaciones y servicios públicos quieren recortarse.

No hay que irse muy lejos. Lo hemos vuelto a ver esta semana, en Reino Unido. Una propuesta mal planteada y con grave riesgo para la sostenibilidad de los ingresos de una gran nación como Reino Unido, provoca una reacción sin precedentes, el desplome de la libra y el aumento exponencial de los tipos de interés. Es entonces cuando el dogmatismo neoliberal hace aguas y se enmienda a sí mismo: intervención acelerada para calmar los mercados y salvar los muebles del naufragio. Por tanto, otra vez la misma pregunta: ¿qué estado del bienestar queremos?

Se podría pensar que habíamos aprendido la lección tras la pandemia. Que el ejercicio diario de solidaridad con los sanitarios en lo más duro del confinamiento era una suerte de expiación de todo un país después de una década de recortes y precariedad inaceptable en un sector tan importante como el de los profesionales sanitarios. Pero, lamentablemente, no ha sido así. Aún no se habían extinguido las últimas restricciones para superar la pandemia y ya elevaban la voz los partidarios de desarmar el sistema de salud pública.

Reaparecen las fórmulas de desmantelamiento del sistema público de protección social. Y lo hacen justo después de haber comprobado que, en lo más duro de la pandemia, es lo público lo que nos salva. A todos. A los ricos y a los pobres. También a los que creen estar exentos por no ser usuarios de la sanidad y la educación públicas. A los que piensan que la seguridad, las infraestructuras, la red consular o los servicios de emergencias se pagan solos. No hay mayor muestra de compromiso con quienes velan por nuestra salud, seguridad y servicios, que garantizar la financiación adecuada de los servicios públicos a través de una fiscalidad justa.

Una vez más: ¿qué estado del bienestar queremos? ¿aceptamos con naturalidad que una persona pueda caer en la pobreza por no poder hacer frente al gasto de una operación de cadera? ¿estamos dispuestos a tolerar que una mujer tenga que hipotecar su vivienda para pagar la factura del tratamiento de un cáncer? En España, una persona se hipoteca para comprar una vivienda o un coche. Pero, ¿aceptamos como lógico que tenga que hacerlo para enviar a una hija a la universidad?



Es necesario recordar estas obviedades cuando reaparecen entre nosotros los brujos que rescatan sus fracasadas recetas y proclaman que “el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”. ¿Entonces las soluciones también están en el bolsillo de los ciudadanos? Es decir, ¿queremos que las soluciones dependan del bolsillo de cada ciudadano? Es decir, ¿nos entregamos a la doctrina del “Sálvese quien pueda”? Alguien que tenga que someterse a un trasplante de corazón pagaría en España 90.400 euros que abona íntegramente el Estado, frente a casi un millón y medio de dólares en Estados Unidos.

Lo cual, por cierto, ilustra también la eficiencia de nuestro sistema. La diferencia es que en España el Estado cubre la operación. Allí, depende del grado de cobertura de un seguro que muchos norteamericanos no se pueden permitir.

Para apreciar lo que uno tiene, no hay nada como saber lo que cuesta. El coste medio de una hospitalización asciende a más de 5.000 euros. El coste medio de procedimientos quirúrgicos es de más de 7.500 euros. El coste de ingreso hospitalario en una cama UCI por COVID superó los 19.000 euros.

El coste total de hospitalización de la red de hospitales del Sistema Nacional de Salud supera los 16.000 millones de euros; una cifra mayor que el presupuesto total de 13 comunidades autónomas en nuestro país. Por cada menor escolarizado, el Estado gastó 6.230 euros. Y por cada hijo estudiando en la universidad, 9.589 euros.

Y otro tanto puede decirse de todos y cada uno de los servicios públicos. Si queremos que el dinero no salga del bolsillo de los ciudadanos, la pregunta es sencilla: ¿confiamos también la extinción de los incendios al bolsillo de cada ciudadano?

No hablamos de gastos abstractos. Hablamos de servicios que ilustran una verdad incómoda para los portavoces de la insolidaridad fiscal: la inmensa mayoría de la gente recibe más servicios de lo que paga en impuestos.

Esta semana, hemos presentado un paquete de medidas fiscales que abunda en este binomio que considero inseparable: justicia social con justicia fiscal para avanzar en cohesión social y combatir el principal mal de nuestra sociedad: la desigualdad.



Con esta propuesta, un trabajador casado con un sueldo de 19.000 euros y declaración conjunta se beneficiará de un ahorro de más de 330 euros. Un pensionista que cobra una pensión inferior a 16.500 euros tendrá un ahorro de 689 euros. Y una trabajadora monoparental con dos hijos y un sueldo por debajo de 18.500 euros, se beneficiará de un ahorro de 516 euros.

Existían otras propuestas sobre la mesa que estudiamos con atención. El Gobierno de España siempre estudia con atención todas las propuestas que hay sobre la mesa. Por ejemplo, la propuesta de una deflactación lineal y carente de progresividad que formuló el primer partido de la oposición. Con esa propuesta, ya en vigor en alguna comunidad autónoma, el ahorro para un trabajador sin descendientes que gana 18.000 euros es de 23 euros. Con la reforma que el gobierno plantea el ahorro no es de 23 euros, es de 746 euros; es decir una cantidad 30 veces superior.

Pongámoslo en perspectiva: ¿330 euros de ahorro fiscal para un trabajador con dos hijos con un sueldo de 19.000 euros o los entre 20 y 25 euros de ahorro con estas otras propuestas? ¿689 euros de ahorro fiscal para un pensionista con una pensión de 16.500 o los entre 20 y 25 euros de ahorro con estas otras propuestas? Esa es la diferencia y lo demás es confusión y una gigantesca cortina de humo.

Este Gobierno tiene claro que cualquier alivio fiscal debe centrarse en la mayoría social. No en beneficiar a unos pocos, que siempre suelen ser los mismos: poderosos y minoritarios. Y que en las circunstancias actuales es necesario pedir un esfuerzo de solidaridad a los que más tienen para ayudar a financiar la protección de la inmensa mayoría social de nuestro país.

Este paquete fiscal reduce la brecha de tributación entre las rentas del trabajo y del capital y contempla medidas de alivio con un alcance potencial de un millón y medio de trabajadores autónomos y más de 400.000 pymes.

No voy a reiterar los detalles ya conocidos: la imposición a las grandes financieras, a las grandes entidades energéticas... Pero sí quiero hacer una consideración en torno a la filosofía del Impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. Lo diré con claridad: esta vez, los costes de la crisis no pueden recaer en la clase media trabajadora, como ocurrió con la crisis financiera. Esta vez serán los más pudientes los que arrimen el hombro para sacar adelante el país.



Hoy quiero hacer un elogio sincero de quienes, desde una posición acomodada, asumen con normalidad que es su deber contribuir en esta coyuntura. De quienes, en definitiva, actúan con patriotismo y sentido común. Con solidaridad hacia sus compatriotas.

Pero además de patriotismo demuestran inteligencia: ¿de qué sirve la riqueza cuando se vive rodeada de diferencias sociales lacerantes?, ¿de qué serviría la riqueza cuando se ve amenazada por niveles de inseguridad galopantes como los que derivan de todas las sociedades con desigualdades acusadas? Para quienes son contribuyentes netos, es decir, para quienes aportan más de lo que reciben, la compensación es moral porque pueden sentirse parte de una comunidad mucho más unida y cohesionada. Pero la compensación es también material porque pueden vivir en una comunidad próspera y segura porque es una comunidad más cohesionada.

Permítanme hacer un ejercicio sencillo del alcance de una propuesta comprometida con la equidad y la justicia social. El Gobierno ha presentado un plan fiscal que permitirá elevar la recaudación en unos 3.144 millones de euros. Esta cantidad permitiría duplicar la partida presupuestaria destinada a vivienda pública, que es el principal problema que tiene nuestra juventud.

Solo la subida temporal del impuesto de Sociedades cubre prácticamente todo el presupuesto de becas y ayudas del curso 2021-22, más el aumento extraordinario de 100 euros por estudiante aprobado el pasado mes de julio.

Esto no es casualidad. Es una correlación llena de simbolismo: 850.000 jóvenes se benefician de un esfuerzo fiscal que sirve para que España tenga un capital humano más formado. Algunas empresas pagan un poco más y así hacen posible que el capital humano de nuestro país mejore.

Por poner solo otro ejemplo: solo con la subida del IRPF a las rentas del capital superior a 200.000 euros cubrimos los 172 millones de refuerzo extraordinario a la atención primaria aprobados hace unos días por el Consejo de Ministros. ¿Dónde está mejor el dinero? ¿En unos pocos bolsillos o en la atención primaria que nos ha protegido y protege a todos y salva vidas, como lo ha hecho frente al COVID-19?



Un estado del bienestar fortalecido y robusto, no sólo protege en momentos de dificultad. Tiene un rol adicional que me gustaría compartir en un foro como este: impulsar y coliderar las grandes transformaciones a las que se enfrenta nuestro país.

El sector público no puede limitarse a jugar un papel de árbitro ajeno al debate de la modernización de nuestro tejido productivo. El sector público también puede promover, impulsar y transformar colaborando con el sector privado.

Es socio inversor y cómplice, lo hemos visto durante estos últimos años, de quienes se atreven a emprender y se implica activamente en reducir las brechas de todo tipo -desigualdad económica, género o territorial, que también es importante en nuestro país, lo saben bien en Galicia- que lastran el enorme potencial que tiene España. No solo eso, invirtiendo en sectores punteros, como puede ser la digitalización o el sector aeroespacial, el sector público cataliza y moviliza inversiones privadas que no ocurrirían sin el acompañamiento público, generando riqueza y empleo.

Pensemos siempre en el ejemplo de Internet. En nuestro caso, podríamos hablar de los PERTE de los fondos europeos, que son un modelo de colaboración público-privada, en la que con 31.000 millones de inversión pública esperamos movilizar unos 50.000 millones de inversión.

Permítanme ejemplificarlo en tres ámbitos concretos, como son la transición ecológica, la transición digital y la cohesión territorial, que es muy importante para pueblos como el gallego.

En primer lugar, en el ámbito de la transición ecológica, contamos con la oportunidad de ejercer un liderazgo ganado a pulso. Debemos contribuir a la soberanía estratégica europea desde nuestra fortaleza en renovables. Simplemente les doy un dato para que vean cuál es el esfuerzo que hemos hecho durante estos últimos cinco años: hoy multiplicamos por 10 la potencia de autoconsumo respecto a 2017 y avanzamos de manera rotunda en potencia instalada eólica y fotovoltaica. Contamos con una capacidad de regasificación que permite cubrir nuestra demanda como ningún otro país de la UE. Hoy, casi el 10% del gas natural que llega a la Unión Europea entra por España.



Se abre una oportunidad única ante nosotros: reducir drásticamente nuestra factura de importación de energía. En 2019 España gastaba 120 millones de euros al día en comprar combustibles fósiles del exterior, es decir, es una transferencia de renta que implicaba 43.800 millones al año.

Terminar con ese pesado lastre exige volcar recursos y tener clara la hoja de ruta a seguir, como la apuesta por el corredor del hidrógeno verde y el impulso de las tecnologías limpias y disruptivas.

La guerra en Ucrania y los problemas de suministro energético a los que se enfrenta Europa hacen más necesaria acelerar una transición ecológica repleta de oportunidades para España, cuya principal fuente de energía y atractivo es el sol.

En segundo lugar, en el ámbito de la transformación digital, quiero detenerme en un concepto abordado en estas jornadas. Me refiero a la autonomía estratégica de Europa y el refuerzo de las capacidades industriales de España. Destinamos el 28% de las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a este objetivo. Ejemplo de este compromiso es el PERTE de semiconductores, dotado con 12.250 millones y clave en sectores como la automoción, las telecomunicaciones o la electrónica de consumo.

En consecuencia, el objetivo del Gobierno de España es el de hacer de nuestro país un lugar en el que se puedan diseñar esos microchips y esos semiconductores. El objetivo, en última instancia, del Gobierno de España es que la brecha digital territorial desaparezca para 2026 y contamos con un buen punto de partida: en 2021 hemos logrado el despliegue de banda ancha en más de 4.500 municipios -España tiene en torno a 8.100 municipios- y 1,2 millones de hogares y empresas. Esta transformación también pasa por las pymes, a las que destinamos esfuerzos específicos, como el programa del kit digital.

Una de cada dos empresas de nuestro país, con entre 10 y 49 empleados ya ha solicitado esta ayuda, que debe contribuir a que un sector tan relevante, como es de las pymes, para nuestra economía ofrezca todo su potencial.

Al final, digitalizar nuestro tejido productivo implica avanzar en productividad y competitividad. Con ella podemos seguir aumentando salarios y crear empleo de calidad. Para ello, debemos seguir avanzando en formación de capital humano, como demuestra la histórica dotación que estamos haciendo en becas, en Formación Profesional, en la Ley de Ciencia...



En definitiva, señoras y señores, como exponía al comienzo de mi intervención, es preciso aprender de la experiencia a la hora de afrontar los desafíos del presente y el futuro.

Una vez más, Europa está ante una encrucijada. Existe, sin duda, cansancio y descontento en parte de nuestras sociedades como consecuencia de la acumulación de las crisis que estamos viviendo, como una pandemia y una guerra a las puertas de Europa. Un descontento con varias manifestaciones, pero un origen muy claro: la desigualdad provocada por recetas políticas y económicas dañinas para la mayoría social.

Pero, afortunadamente, la encrucijada nos ofrece otra ruta. La que nos ha señalado Europa en su respuesta a la pandemia y, ahora, a la guerra en Ucrania. Una Europa capaz como nunca de actuar de manera unida, valiente y solidaria ante amenazas y retos históricos. La Europa que ha establecido la transición energética, la revolución tecnológica y la lucha contra toda forma de desigualdad como vectores centrales de su proyecto político.

Esa es la Europa por la que merece la pena trabajar. La que estamos fortaleciendo desde un papel protagonista; y creo que eso nos debe enorgullecer a todos. Porque España, pocas veces había sido tan decisivo papel en el desarrollo del proyecto europeo como ahora.

En esta tarea, caminamos al lado de gobiernos de muy distinto signo. Se trata de defender la gran tradición europea de la socialdemocracia y la democracia liberal frente al retorno de los discursos reaccionarios del pasado.

Pero no hablamos solo de una tarea de gobiernos. La elección de qué camino queremos seguir nos interpela a todos. Y muy especialmente a los agentes económicos y sociales. En ningún otro campo es tan importante la colaboración público-privada como a la hora de frenar el descontento social que alimenta las propuestas reaccionarias.

De la misma manera que un estado social debe ser un estado inversor, emprendedor y protector, es imprescindible que los motores productivos impulsen activamente una



sociedad justa y cohesionada. Es la mejor forma de fortalecer los valores constitucionales y de la Unión Europea. Valores que España defiende por convicción y no por mero interés. Y que nos llevan a ser solidarios con los países más expuestos a la tiranía de Putin en estos momentos de dificultad, como también nosotros pedimos al principio de la pandemia que fuera solidarios con un país que tuvo en su principal activo, el turismo, la principal afección del virus del COVID-19.

Acabo. En un foro como este, de marcado carácter internacional, de clara vocación atlantista y, por tanto, global, permítanme que acabe dedicando unas palabras a las mujeres de Irán. Porque no hay tradición, costumbre o creencia que pueda justificar el uso de la violencia para coartar la libertad y los derechos de las mujeres. Y quiero mostrar nuestra admiración por la valentía de las mujeres de Irán y reiterar nuestra rotunda condena por la represión ejercida. La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres es universal y se libra en muchos frentes. No podemos dar ni un paso atrás en los derechos y libertades que afectan a la mitad de nuestra población. Muchas gracias.